

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/327079316>

# Sentir los derechos: La apropiación subjetiva de derechos de trabajadoras sexuales en la ciudad de Bogotá

**Article** · March 2018

CITATIONS

0

READS

4

**2 authors**, including:



**Carlos Alfonso Laverde Rodriguez**

The College of Mexico

**8** PUBLICATIONS **4** CITATIONS

SEE PROFILE

# SENTIR LOS DERECHOS: LA APROPIACIÓN SUBJETIVA DE DERECHOS DE TRABAJADORAS SEXUALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

CARLOS ALFONSO LAVERDE RODRÍGUEZ<sup>1</sup>

## RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la forma en la que trabajadoras sexuales en la ciudad de Bogotá, se han apropiado y experimentado de una serie de derechos en materia laboral que les fueron negados históricamente. A partir de las últimas dos décadas, algunos derechos se han hecho visibles gracias a un panorama legal que los ha reconocido progresivamente, aunque de manera parcial, tanto a nivel local como nacional. Propongo una perspectiva del concepto conciencia legal para exponer la paradoja de un progresismo jurídico que se vive en la ciudad, pero un contexto social que sigue estigmatizando el trabajo sexual. Este proceso de apropiación lo rastreo a partir de las experiencias de las trabajadoras sexuales que se han organizado para defender sus derechos en la ciudad de Bogotá.

**Palabras Clave:** Apropiación Subjetiva de Derechos - Trabajo Sexual - Derechos Laborales - Organizaciones de Trabajadoras Sexuales - Conciencia Legal - Progresismo Jurídico

## ABSTRACT

The aims of this article is to reflect about how the sex workers in Bogota have appropriated and experimented a series of rights that, historically, were denied to them in the labor matter. Since the last two decades, some of the rights have become visible thanks to a legal scene that, although in a partial way, has progressively recognized them at local as national level. I suggest a perspective, from the concept of legal consciousness, to expose a paradox of legal progressivism in a social context that continues to stigmatized the sex work. I have found this process of appropriation based on the sex workers' experiences who have been organized to defend their rights in the city of Bogotá.

**Keywords:** entitlement, sex work, labor rights, organizations of sex workers, legal consciousness, legal progression.

[1] Candidato a Doctor en Ciencia Social con Especialidad en Sociología por El Colegio de México. Correo electrónico: smials1@gmail.com/claverde@colmex.mx

## INTRODUCCIÓN

Este artículo hace parte de una investigación más extensa<sup>2</sup> que surge por el interés de entender cómo mujeres que realizan una actividad generalmente desacreditada socialmente al prestar servicios sexuales remunerados, se convierten en sujetos políticos y se reconocen de diversas formas frente a la ley y a la sociedad. Todo ello en un momento en el que el desarrollo jurídico en Colombia, específicamente en Bogotá, ha impulsado una serie de derechos frente a su trabajo que no han sido necesariamente garantizados. La intención por tanto de este artículo es mostrar unas primeras reflexiones respecto de cómo las trabajadoras sexuales organizadas se han apropiado subjetivamente de sus derechos.

Parto de considerar que el proceso de apropiación subjetiva de derechos no es homogéneo y por tanto la forma en la que éstos se experimentan es diferencial. Si bien este proceso es diverso, las trabajadoras sexuales organizadas en Bogotá conviven con experiencias y referencias al derecho en su cotidianidad, en algunos casos de forma muy explícita, en otros no.

Así, algunas trabajadoras sexuales<sup>3</sup> invocan el marco legal mediante su discurso, asisten a las discusiones sobre política pública en la ciudad, hacen entrevistas en medios de comunicación exigiendo sus derechos, interponen acciones de tutela<sup>4</sup>, denuncian los maltratos a las que son víctimas por agentes del Estado, entre otras acciones que apuntan al cambio e intensificación de las normas jurídicas.

Por otro lado, hay mujeres que no participan tan activamente en la discusión legal, incluso no tienen referencia a los derechos a los que pueden tener acceso, sin embargo, sienten que los tienen, aludiendo a principios de dignidad y justicia, hacen reclamaciones en su medio laboral, marcan los límites frente a los clientes, reclaman condiciones de salubridad ante los administradores de los establecimientos y enfrentan muchas de las formas de violencia a las que están expuestas a diario.

Como marco común, los relatos de las mujeres hablan de abusos de autoridad, en algunos casos de explotación, de diversos tipos de violencia tanto de clientes y compañeros/as de trabajo, de condiciones indignas para la realización de su trabajo, de problemas personales con sus familias y parejas, entre otras situaciones que muestran un panorama conflictivo.

Entonces, aunque reconozco como un gran avance legal el reconocimiento del trabajo sexual en diferentes órganos del Estado como la Corte Constitucional, me pregunto ¿De qué sirve este marco jurídico si no se hacen efectivos sus derechos? En otras palabras ¿Cómo entender la paradoja de un abundante sistema legal que dice proteger sus derechos en un contexto que, parece seguir violentando de forma cotidiana y sistemática los derechos de las trabajadoras sexuales?, ¿Cómo entender lo que dice Austin (1990) cuando se refiere a «hacer cosas con palabras» en el sistema jurídico en el caso colombiano? Sin duda, considero que la Ley tiene un efecto simbólico positivo en el comercio sexual en tanto permite el reconocimiento de quien lo realiza como sujeto de derechos, pero aún es necesario

[2] Este artículo es una reflexión respecto al proceso investigativo en el que se conjuntan el proceso etnográfico y algunos supuestos teóricos. En tal virtud, lo que se expone en este texto debe ser leído como un resultado preliminar y una propuesta de elaboración en desarrollo.

[3] Entiendo por trabajadora sexual a la mujer mayor de edad que ofrece la prestación de un servicio generalmente sexual y/o erótico (aunque no siempre ocurre) de forma autónoma, y que lo realiza de forma voluntaria y manera consensuada bajo una compensación económica, aunque no exclusivamente. La prestación del servicio sexual tal como lo plantea Weitzer (2012) incluye actos con contacto físico entre los oferentes y los demandantes, así como la estimulación sexual indirecta como la pornografía, sexo telefónico, webcam, etc. El trabajo sexual es un proceso de creación simbólica y afectiva que recrea cierta clase de intimidad de parte de quien presta el servicio. Este trabajo implica variadas formas de actividad sexual y/o relaciones afectivas remuneradas. Esta definición no niega la existencia de la trata de personas con fines de explotación sexual que se realiza cuando no existe el consentimiento de quien ofrece los servicios sexuales, en cuyo caso se convierte en delito y debe ser perseguido por las autoridades.

[4] La acción de tutela es una garantía de tipo constitucional que ha funcionado en Colombia desde la promulgación de la Constitución de 1991. Este recurso jurídico tiene como finalidad el que cualquier ciudadano pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos hayan sido puestos en amenaza o hayan sido vulnerados.

generar conocimientos más profundos respecto a las formas en las que, particularmente, este grupo de mujeres se han apropiado subjetivamente de sus derechos.

La presente reflexión es parte del análisis del trabajo de campo con trabajadoras sexuales en la ciudad de Bogotá vinculadas a organizaciones que defienden sus derechos, particularmente en el barrio Santa Fé<sup>5</sup> durante el segundo semestre del 2016 y parte del primer semestre 2017. El material de campo que se muestra es derivado de entrevistas semi-estructuradas realizadas a un grupo de trabajadoras sexuales que se organizaron en la Asociación de Mujeres Buscan Libertad -Amubuli. Dichas entrevistas se estructuraron a partir de preguntas abiertas concernientes a la relación entre las autoridades, los actores del medio del comercio y las experiencias de estas mujeres en el desempeño de su trabajo.

En tal sentido, dado que la investigación involucra un proceso de recolección de información más abarcador, este artículo no se puede entender como un trabajo de investigación culminado, sino como la presentación parcial de unas posibles rutas de análisis del problema de investigación planteado.

En la primera parte expongo un acercamiento al problema de investigación en el que se señala la paradoja de un sistema legal que se ha destacado por su progresismo sin que haya desembocado en un avance en todos los aspectos de las vidas de las trabajadoras sexuales. Posteriormente, en el segundo apartado presento el contexto social particular en el que surge un marco de derechos, y a su vez organizaciones de la sociedad civil que se han organizado para defender sus derechos. Finalmente, despliego un primer marco de análisis que permita ahondar en la forma en la que las trabajadoras sexuales viven sus derechos, tanto en el plano individual como a partir de su participación en organizaciones.

## EL TRABAJO SEXUAL ANTE EL PANORAMA JURÍDICO EN COLOMBIA: CONTRADICCIONES Y PARADOJAS

La fuerza del derecho otorga legitimidad sobre las demandas en el plano social, así como la ideología de la justicia formal ejerce cierto control sobre la interpretación de los hechos y las prácticas sociales. De tal manera las demandas sociales pueden desmontarse en función de un escaso reconocimiento y legitimidad social (Merry, 1986).

Por tanto, la relación entre marco jurídico y prácticas sociales no implica solamente un marco de referencia en el que se definen reglas, sino que por el contrario y, como lo ha demostrado Scoular (2014), se encuentra ligado a la construcción cultural que se cristaliza en el campo jurídico. De esta manera, si bien la legislación es una construcción cultural, su implementación tiene implicaciones en la producción de nuevas relaciones sociales.

En otras palabras, la ejecución de la ley no es unilateral y por tanto no se recibe pasivamente. La fuerza de las normas sociales crea una tensión entre el marco legal y el reconocimiento social, en algunos casos por cuenta de grupos sociales que defienden sus derechos desde una historia, carácter, rango e identidad social particular, situación que llamaré Merry (1986) justicia situacional.

De tal forma, a pesar de que exista una reglamentación que permita la protección de las trabajadoras sexuales, es a partir de las normas y valores sociales que se legitima y restringe la ejecución de la ley y por tanto los derechos adquiridos. Esto es explicado entre otras causas por un sistema cultural anclado en normas y valores sociales que polarizan los roles de género y además lo impone a las mujeres (Agoff, 2009).

[5] Mi interés de investigación se ha centrado en el Barrio Santafé, particularmente en la zona destinada por la reglamentación a realización del trabajo sexual denominada como Zona Especial de Alto Impacto- ZESAI. Es importante mencionar que en esta zona se ubican variadas organizaciones no gubernamentales y del Distrito que agrupan a estas mujeres, lugares en donde realicé la mayor cantidad de entrevistas, sin embargo, en el trabajo de campo las trabajadoras sexuales manifestaron que no necesariamente realizan su trabajo en este lugar sino en otras zonas de la ciudad, incluso en otros municipios y ciudades del país.

El reconocer o prohibir el trabajo sexual en un marco jurídico define una frontera normativa entre lo aceptable y lo reprochable y, por tanto, de las condiciones en las que se realiza este trabajo. Aunque si bien el cambio legal no es inmediato, existen evidencias para afirmar que lo jurídico tiene efectos prácticos en la construcción de las subjetividades en un largo plazo como lo plantean Scoular (2014) y Agoff (2009). El discurso jurídico tiene implicaciones como herramienta que permite aceptar o rechazar subjetivamente ciertas condiciones de vida en la cotidianidad.

La forma en la que asumen los derechos las trabajadoras sexuales la retomo a partir del concepto de conciencia legal, entendido como una manera en la que las personas traducen los principios jurídicos en su vida cotidiana (Ewick & Silbey, 1998) y de la propuesta de Amuchastegui, Rivas y Ortiz Ortega (1999) respecto a la apropiación subjetiva de derechos que permite tener en cuenta no solo cuestiones estructurales (posición de clase, ocupación, conformación del hogar, educación, entre otros) sino además las percepciones de los sujetos, es decir la forma que su individualidad cambia a lo largo del tiempo.

Bajo este panorama, un punto crucial de la discusión está en comprender las implicaciones de abordar el marco del reconocimiento jurídico de los derechos laborales en el trabajo sexual. Esto tiene importantes implicaciones en materia de avance de protección y garantía de los derechos de ciudadanía en un contexto en el que el estigma social ha definido las condiciones sociales en las que se ha ejercido esta actividad, y que históricamente ha configurado las formas de concebir el cuerpo, la sexualidad y el trabajo.

Si bien existen normas jurídicas que intentan proteger los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, aún existen barreras que impiden la apropiación de éstos. Mientras existe una norma legal que ampara los derechos, en el plano de las interacciones, las normas y los valores sociales existen barreras para su apropiación ¿cómo entender esta brecha?

## LA PARADOJA DEL PROGRESISMO DE LA LEY Y SU INEFICACIA

El escenario jurídico que ha comenzado a reconocer progresivamente los derechos de las trabajadoras sexuales en el caso de Bogotá se ha extendido progresivamente a nivel nacional. El avance jurídico no se ha dado per se, sino que han existido acciones desde organizaciones como tutelas interpuestas frente a atropellos de los derechos de trabajadoras sexuales. Ello, a su vez, ha conducido a ampliar y ahondar, desde el Estado, sus derechos, como por ejemplo las Sentencias de la Corte Constitucional Colombiana en años recientes.

Uno de estos ejemplos es la Sentencia T-594 de 2016 por parte de la Corte Constitucional. Esta sentencia surge a partir de una tutela interpuesta por el abuso policial que sufrieron mujeres en una zona céntrica de la ciudad.

La tutela interpuesta por las mujeres con la ayuda de la organización Parces llegó hasta la Corte Constitucional en donde les dieron la razón y se instó a las instituciones del Estado a regular este trabajo además de dar disposiciones a instituciones como la Policía para no impedir el libre tránsito y permanencia de trabajadoras sexuales en los lugares donde habitualmente realizan el contacto con los clientes para posteriormente prestar el servicio.

Recientemente, la Corte Constitucional se ha vuelto a pronunciar en la Sentencia T-073 de 2017 la cual surge por una acción de tutela interpuesta por la dueña de un establecimiento el cual tiene como actividad central el comercio sexual. Dicha persona demanda ante la Corte el derecho al trabajo, el debido proceso e igualdad ante la orden de las autoridades locales de cerrar su establecimiento por incumplimientos relacionados con el uso del suelo. Sumado a lo anterior, resulta de interés que en la visita realizada por las autoridades a dicho establecimiento se encontró la presencia de 4 trabajadoras sexuales de origen venezolano, lo que obligó a la Corte a pronunciarse al respecto.

Entre otras medidas, la Corte enfatizó la obligación que tienen autoridades como Migración Colombia o la Defensoría del Pueblo en proteger los derechos de trabajadoras sexuales migrantes de forma plena y exhortó a estas instituciones para que, a la par que se combata la trata de personas con fines de explotación se apoye a estas mujeres en la consecución de sus visas de trabajo y demás documentos para que puedan desempeñarse, si es su voluntad, como trabajadoras sexuales, evitando persecuciones y vulneraciones.

En este contexto, es claro que en los últimos siete años, pero especialmente en los últimos dos, ha surgido una amplia jurisprudencia a nivel nacional dirigida a la protección de los derechos laborales de quien realiza el trabajo sexual al ser considerada una actividad ejercida por sujetos de especial protección constitucional<sup>6</sup>. Resulta interesante, en un contexto como el colombiano - en el cual existe una gran crisis de credibilidad de las instituciones del Estado - que muchas de las acciones de las organizaciones sociales siguen usando como forma privilegiada las herramientas del derecho, a pesar de que esas acciones no siempre se traducen en la materialización inmediata de sus demandas. Esta es una razón más para que se hable en Colombia, como lo menciona Lemaitre (2009), de un fetichismo legal, especialmente en materia de disputa social.

En este sentido, este fetichismo se refleja en los múltiples pronunciamientos de tipo jurídico sobre comercio sexual, temas que en décadas anteriores apenas sí aparecían como un tema de atención del Estado. No obstante, este escenario no se ha traducido en la satisfacción de las necesidades que se reclaman desde las organizaciones, aunque son batallas que sienten propias<sup>7</sup> y han permitido darles voz en el escenario político de la ciudad y del país<sup>8</sup>.

Así, las organizaciones integradas por trabajadoras sexuales se han convertido en un actor clave en la ciudad para llevar a cabo las exigencias del cumplimiento de los derechos en este trabajo, sumado a acciones individuales de reivindicación que se llevan a cabo en la cotidianidad, algunas de manera desapercibida y otras de formas más notoria<sup>9</sup>.

## SURGIMIENTO DE UN CONTEXTO DE DERECHOS

Karen tiene 43 años y es trabajadora sexual desde que tenía quince años. Su horario laboral comienza a partir de las primeras horas de la tarde y se extiende hasta la noche. En algunas ocasiones termina al cierre de los establecimientos, a las tres de la madrugada. Paty tiene 47 años de edad y ha trabajado sexualmente 29 años, sus labores van de lunes a sábado desde las 7:30 am hasta las 5:30 pm. Por su

[6] La Sentencia T-629 de 2010 señala que el plantearse como trabajadora en el oficio de la prostitución ubica a la mujer que desempeña este trabajo en un grupo discriminado históricamente y, por lo tanto, la hace merecedora del status jurídico iusfundamental de sujeto de especial protección por parte del Estado. La Corte Constitucional Colombiana en su Sentencia T-629 de 2010 considera sujetos de especial protección a trabajadoras sexuales con referencia a los artículos 13 (igualdad ante la ley), 43 (igualdad ante la ley de hombres y mujeres) y 53 (igualdad de oportunidades para los trabajadores) de la Constitución Política de 1991.

[7] Organizaciones como Parces y Asmubuli han liderado las tutelas y el acompañamiento legal a los procesos que han concluido en pronunciamientos legales sobre trabajo sexual.

[8] Es importante hacer notar que a pesar de que Colombia se proclama como un país descentralizado, en muchos aspectos sociales y legales como el trabajo sexual, las temáticas y directrices son centralistas. Muchas de las discusiones de interés nacional toman relevancia al pasar por la discusión de los actores sociales presentes en la ciudad de Bogotá.

[9] Aunque pueden ser múltiples las manifestaciones individuales de trabajadoras sexuales de reivindicación a través de la Ley o que han tenido efecto en ésta, retomo los casos expuestos por Nieto (2015). Este autor describe la influencia en la esfera pública del caso de Dania, mujer protagonista de un escándalo que vinculó a agentes de seguridad del entonces presidente Barack Obama y que impulsó la propuesta del Proyecto de Ley 069 de 2012; y en segundo lugar, el caso de LAIS (seudónimo de una trabajadora sexual) quien interpuso una acción de tutela para proteger sus derechos laborales al ser despedida en su condición de embarazo y que derivó en la Sentencia T-629 de 2010 en la que la Corte Constitucional de Colombia protege los derechos en el trabajo sexual.



parte, Flor, mujer de 48 años lleva trabajando sexualmente 17 años y solo lo hace en horas de la tarde en días entre semana<sup>10</sup>

Tanto Karen, como Paty y Flor sienten que en su trabajo han sido maltratadas en varias oportunidades por los administradores, por las autoridades y por los clientes. Además de estas circunstancias, manifiestan su inconformidad porque los establecimientos en donde trabajan no cuentan con las medidas de higiene y de seguridad necesarias y han sido víctimas de abuso de parte de las autoridades y de los clientes.

Entonces, a pesar de existir lineamientos institucionales que protegen los derechos de estas trabajadoras, existe un contexto social en el que en la realización de su actividad económica no brinda acceso a derechos como los tendrían en otras actividades laborales. Están expuestas a situaciones indignas y a diversas formas de violencia. En sus condiciones de trabajo persiste el descrédito social y la estigmatización.

Muchas trabajadoras sexuales como Karen, Paty y Flor realizan este trabajo al ser una opción económica que les permite obtener ingresos. Sin embargo, su trabajo representa una ruptura del imaginario de castidad y recato que caracteriza a la feminidad (Lamas, 2014), razón por la cual su trabajo es despreciado y estigmatizado.

La dificultad del escaso o nulo reconocimiento social con el que cuenta este trabajo crea barreras de acceso a sus derechos. Es así que estas mujeres sufren de condiciones como la explotación laboral, además de tener riesgos para la seguridad y la integridad personal, un nulo acceso al sistema de protección social que garantice una pensión y/o ingreso al sistema de salud, y la imposibilidad de acceder a créditos, entre otras garantías laborales.

No obstante, en Bogotá existe un marco jurídico que en la mayoría de los casos les concierne a aquellas mujeres que trabajan en las zonas de la ciudad en las que tradicionalmente ha tenido lugar el comercio sexual.

Hasta el 2001, el trabajo sexual en la ciudad no estaba reglamentado, aunque si era tolerado. Esta actividad no se prohibía, pero tampoco se hacía explícita en el plano jurídico en donde apenas aparecía como actividad que se desarrollaba en lugares de "impacto social negativo"<sup>11</sup>. Después de este año, con el surgimiento de un decreto que reglamentó el trabajo sexual en zonas específicas, comenzó en la ciudad un viraje<sup>12</sup> hacia una perspectiva reglamentaria que intentó reconocer derechos a estas mujeres a través de la exigencia a los establecimientos de condiciones adecuadas de salubridad, seguridad y control sobre las trabajadoras sexuales<sup>13</sup>. Surgieron posteriormente decretos que con cada vez más fuerza mostraban un interés por los derechos, específicamente laborales, de esta población<sup>14</sup>.

[10] Los nombres usados fueron cambiados para mantener la confidencialidad de las informantes. Los casos presentados de Karen, Paty y Flor son extractos de entrevistas realizadas en enero del 2016 a trabajadoras sexuales integrantes de la Asociación de Mujeres Buscando Libertad -Asmubuli.

[11] Así aparece expuesto en el Acuerdo 7 de 1979 emitido por el Concejo de Bogotá en su artículo 36. Disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=902>

[12] Hablo de viraje porque desde 1948, tal como se evidencia en el Decreto 95 de ese mismo año en la ciudad, se sostenía un enfoque prohibicionista con el que se impulsaba una persecución a quien realizara o se encontrara relacionado con esta actividad. Durante los siguientes años comenzaron a surgir Decretos en los que, si bien no aparecía el trabajo sexual como actividad explícita, si se podía considerar dentro de un marco reglamentario asociado a planeación y usos del suelo en la ciudad como en el Acuerdo 07 de 1979 y posteriormente el Decreto 325 de 1992 sin que aún se nombrara la actividad y creara un vacío jurídico.

[13] Al respecto se puede revisar el Decreto 400 de 2001, disponible en: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4539>

[14] Como se puede ver en el Decreto 188 de 2002, Acuerdo 79 de 2003 o el Decreto 335 de 2009.

Una lógica de derechos emergió en el panorama de estas mujeres. A este proceso reglamentario se sumaron varias sentencias de la Corte Constitucional como la T-629 de 2010, La T- 736 en 2015, T-594 en 2016 y finalmente, en el 2017, la Sentencia T-073.

El progreso jurídico señalado dio fuerza a las dinámicas del trabajo sexual en zonas de la ciudad estipuladas para su realización como el barrio Santafé, lugar que fue objeto de la reglamentación y que además se ha caracterizado como el lugar con mayor presencia en la historia reciente de esta actividad en la ciudad. Los decretos y políticas de atención institucional se formularon para desarrollarse e implementarse en esta zona de la ciudad. Después del 2001 aparecieron las visitas de personal de la Secretaría de Salud, la supervisión de la Secretaría de Integración Social, así como operativos de vigilancia y control de la policía.

A partir de la promulgación de estos decretos el número de establecimientos aumentó en zonas como el barrio Santa Fé, lugar denominado como Zona Especial de Alto Impacto. Al mismo tiempo, el ambiente promovió el surgimiento y/o visibilidad de organizaciones civiles y de instituciones del Estado que tomaron este barrio como centro de su objeto social.

En este ambiente, tomaron fuerza organizaciones que comenzaron a hacer visibles las carencias de las trabajadoras sexuales en materia de sus derechos. Surgieron organizaciones de corte religioso, no confesionales, del Estado y de mujeres trabajadoras o ex-trabajadoras sexuales, además de una extensión de servicios a esta población de parte de las instituciones del Distrito como la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y recientemente, la Secretaría de la Mujer. Siguiendo la propuesta de Nieto (2015) estos grupos de actores se pueden categorizar en tres: 1. Legisladores y operadores institucionales; 2. Organizaciones defensoras de derechos humanos que se orientan bajo el paradigma abolicionista del comercio sexual; y 3. Organizaciones de trabajadoras sexuales que defienden sus derechos laborales.

Para algunas de estas organizaciones los objetivos se focalizaron en tareas de tipo asistencial y reconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres al realizar esta actividad; otras buscaron el empoderamiento de las mujeres a partir del reconocimiento de derechos de tipo laboral. Así, las diversas posiciones desde las que han comprendido el comercio sexual las organizaciones han llevado a que existan disputas en el marco de lo que Lamas (2016) ha llamado guerras en torno a la sexualidad. Sin embargo, resulta llamativo que la disputa a partir de un marco legal ha creado un ambiente en el que se fortalece la juridificación del lenguaje<sup>15</sup> en algunos casos, así como prácticas cotidianas en la que se experimenta el derecho a partir de una noción (aunque sea incipiente) de ciudadanía.

## **SENTIR LOS DERECHOS: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS EN EL COMERCIO SEXUAL**

El proceso de apropiación subjetiva de derechos de las trabajadoras sexuales no solo es visible en las reclamaciones directas que hacen las organizaciones y sus integrantes hacia el Estado, supone además el surgimiento de expresiones cotidianas en las que se vive el derecho. Lo sienten y traducen en las prácticas diarias, como en la negociación de condiciones con los clientes, en el definir y defender límites con los administradores y con los dueños de establecimientos. Considerarse como sujetos de derechos los ubica en un plano de reclamación en diferentes vías y frente a diferentes destinatarios (desde los actores relacionados en el medio de trabajo, a las instituciones del Estado, y en un plano más abstracto, a la sociedad en general).

Sin duda, la apropiación subjetiva que han hecho estas mujeres respecto a sus derechos se inscribe en un proceso de construcción social del sentido de la Ley que experimentan en sus vidas, proceso que

[15] Este término es usado por Ariza & Ángel (2015) para dar cuenta de la forma en la que poblaciones, generalmente marginadas y excluidas del derecho, desde su situación hacen uso de un lenguaje legal para entrar en las dinámicas institucionales en las cuales pueden obtener satisfacción a sus demandas.



en algunos casos ha llevado a cambios jurídicos. Esta perspectiva de análisis de la apropiación de derechos está en consonancia con lo planteado desde los años ochenta en el movimiento Law & Society<sup>16</sup>, quienes estudian el derecho como un campo de poder en el que la Ley no se puede comprender desde su lógica instrumental y causal, sino que en sí misma hace parte de la realidad social (Ewick & Silbey, 1998).

De tal manera, al analizar el papel que el derecho ha cumplido en el caso de la reivindicación de derechos de trabajadoras sexuales, es conveniente preguntar no qué ha hecho la Ley sobre las exigencias realizadas, sino cómo esta población ha hecho que el derecho comience a actuar a partir del cambio e interiorización de lo escrito en las instituciones del Estado y en sus propias vidas. Lo claro es que, en el caso particular del trabajo sexual, tal como lo afirma Varela (2011), la interpretación de la Ley se construye en un escenario de conflictos y tensiones entre los actores implicados que exceden los límites del campo jurídico.

A partir de la organización de estas mujeres, planteo que es posible establecer como forma de análisis dos niveles interrelacionados. En primer lugar, la forma en que las trabajadoras sexuales ejercen sus derechos en la expresión cotidiana, en el día a día en su trabajo ante los clientes, administradores, policías y demás personas vinculadas a su contexto, y su posición frente a las autoridades. En segundo lugar, el papel que los derechos juegan desde la participación en las organizaciones, pues son estos espacios un punto de encuentro y socialización de acciones y estrategias para posicionar sus demandas ante las autoridades.

Los dos niveles que propongo apuntan a reconocer que existen formas diferentes de experimentar la lógica de los derechos, tanto a nivel individual como colectivo.

La forma de presentar la información se ha seguido a partir de los dos niveles señalados previamente: 1. A nivel de la experiencia individual y las formas en las que se puede vivir y sentir el derecho, incluso sin nombrarlo, y 2. a partir de la experiencia en las organizaciones y la consolidación de un discurso que apela directamente al reconocimiento legal.

## **SENTIR EL DERECHO EN LA VIDA COTIDIANA: LEGITIMIDAD EN LA RECLAMACIÓN DE DERECHOS EN EL ENTORNO LABORAL**

La vulneración de los derechos es un tema central para entender las dinámicas que involucran al comercio sexual en Bogotá (Laverde, 2014). Sin embargo, no es claro cómo las trabajadoras sexuales viven y experimentan sus derechos o su ausencia y cómo piensan el sistema legal en las experiencias cotidianas de su trabajo, en sus vidas. Lo que para una trabajadora sexual puede ser una violación a sus derechos, para otra hace parte de las experiencias cotidianas que se relacionan con su actividad y lo ha normalizado a tal punto que no considera legítima su reclamación. Existe una forma diferenciada en la que estas mujeres viven sus derechos.

Lo que planteo es que poco se conoce sobre las representaciones que sobre la Ley las trabajadoras sexuales tienen y que, al hacer parte de las prácticas diarias, se convierten en pieza de su cosmovisión, y por lo tanto no son tan visibles como cuando se presenta una acción colectiva de reivindicación. En este sentido comparto el planteamiento de Nielsen (2000) quien considera que las personas en su cotidianidad no piensan en Ley, simplemente realizan sus acciones sin un marco jurídico porque han normalizado las reglas con las que constantemente se rigen de forma cotidiana.

La propuesta de análisis que propongo busca escudriñar la forma en la que, a partir de los relatos de trabajadoras sexuales, existen incipientes nociones sobre la apropiación subjetiva de derechos que pueden o no hacerse explícitas en términos del uso de un lenguaje que apele a lo jurídico. Sin embargo,

[16] Los autores más influyentes en la creación de esta línea dentro de los Estudios de Conciencia Jurídica son, de acuerdo con García (2010) Sally Engle Merry, Barbara Yngvesson, Patricia Ewick y Susan Silbey, Austin Sarat y Lucie White

éstas dejan entrever un posicionamiento en las que las trabajadoras sexuales plantean un devenir sujeto que se debate entre la internalización de ciertos valores y normas y su resistencia.

En este orden de ideas, las trabajadoras sexuales viven a diario escenarios en los que constantemente están definiendo sus límites frente al medio laboral y marcan sus términos frente a las exigencias que se les solicita en su medio. En una entrevista realizada a una integrante de Asmubuli la mujer expresó:

No permito que me controlen, pagar multas ni nada de eso, porque anteriormente teníamos que pagar multa si salíamos con un cliente, si nos emborrachábamos teníamos que pagarle multa por habernos emborrachado e irnos a dormir, así era anteriormente, ahora no, ahora yo dispongo de mi tiempo, soy dueña de lo que quiero hacer, si yo quiero llegar a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana irme a las once de la mañana. Si no le sirve al dueño del establecimiento pues no vuelvo” (Entrevista realizada en enero de 2016, Asmubuli).

Aunque, en términos legales no existen disposiciones para establecer los límites sobre el comercio sexual y su regulación laboral, no ha impedido que a través de un concepto ampliado de trabajo se comiencen a formar regulaciones que son comprendidas en un medio y también formas en que las trabajadoras sexuales las interpretan, las interiorizan, pero también las discuten y desafían (Laverde, 2016).

Sin embargo, el marco de reglas que opera en el comercio sexual no está completamente alejado de un marco formal. El correlato de lo jurídico y la legalidad es un paraguas bajo el cual las personas interpretan su contexto particular. En este sentido, la legalidad como lo afirman Ewick y Silbey (1998) funciona como un marco interpretativo que otorga recursos con los cuales se constituye el mundo social.

Así, es posible que existan diferentes formas en como las personas se relacionan con la Ley. Ejemplo de ello es que algunas personas apelan al derecho de una forma consciente, lo usan para acceder, desde el marco de ciudadanía al acceso y goce de sus derechos, y por otro lado, otras personas, aunque con nociones vagas del marco legal lo usen sin notarlo.

Lo interesante es la lógica de reclamación que está presente cuando las mujeres, como se expresa en la anterior cita, consideran que no están recibiendo lo que consideran que merecen a cambio de lo que están ofreciendo. Reafirman una serie de exigencias que en el caso citado son condiciones previas para realizar su trabajo, no son solo exigencias sino derechos de hacer su trabajo con condiciones que para ella sean dignas y aceptables.

Por otra parte, una de las reclamaciones más constantes que relatan las trabajadoras sexuales está relacionadas con las instituciones y las condiciones que en algunos momentos han impuesto para realizar su trabajo. En el caso de Bogotá, las trabajadoras sexuales deben realizar un curso denominado de Derechos Humanos y Desarrollo Personal, también conocido como Código de Policía<sup>17</sup> el cual tiene como objetivo ofrecer información que las instituciones del Distrito consideran relevante para las trabajadoras sexuales. Este taller hace parte de una de las regulaciones que más problema genera a las mujeres, tanto por el tiempo de duración (24 horas distribuidas en una semana) que en algunas ocasiones les impide trabajar, así como por la exigencia que en algunos establecimientos se realiza del certificado.

Una trabajadora sexual entrevistada considera que asistir a estos talleres implica una forma de violencia para ellas porque desconfían del uso que se puede hacer con la información que entregan al registrarse, y por tanto se ha negado a asistir. Esta mujer cuestionó la obligatoriedad de estos talleres:

¿Por qué?, ¿por qué lo tengo que hacer?, ¿por qué no lo hacen ellos primero [policías]?, ¿por qué solamente para nosotras?, ¿por qué no hacen el código al profesor?, ellos mis-

[17] En el contexto cotidiano del comercio sexual se le atribuye el nombre a este curso de Código de Policía porque es a través del Acuerdo 079 de 2013 (por el cual se expide el Código de Policía de la ciudad) que se reglamenta la impartición de un curso anual.

mos, ¿por qué no hacen el código? Si ellos se sientan conmigo y lo hacen, yo con mucho gusto lo haría, si fuera igualitario. (Entrevista realizada en enero de 2016, Asmubuli)

La reclamación que hace esta mujer es en tono de cuestionamiento, tanto a la Policía e incluso a la sociedad en general. Esta mujer reclama por una regla que no considera justa por varias razones. Considera en primer lugar que si se habla de derechos en un taller que está contemplado en el Código de Policía, la contraparte que es la Policía debería igualmente realizarlo.

En segundo lugar, cuestiona la sociedad en general y cuestiona por qué otras profesiones no deben realizar un taller en derechos, es decir, cuestiona la desigualdad frente a las exigencias que se realizan al trabajo sexual en tanto trabajo, ¿por qué el trabajo sexual es tan diferente que incluso está regulado no en el Código Sustantivo del Trabajo sino en el Código de Policía que es un marco legal para asegurar la convivencia de la ciudadanía?, ¿Qué implica que esté en un Código en el que se tratan temas de seguridad y convivencia?, ¿son las trabajadoras sexuales un riesgo?, ¿o el riesgo es hacia ellas?, pero si es hacia ellas ¿por qué no existe una política pública diferencial como si la hay para poblaciones en riesgo como la política pública para habitante de calle o la política para la vejez?

En tercer lugar, la reclamación apela al sentido de igualdad. Todas las reclamaciones tienen de fondo una exigencia de igualdad. Sin embargo, en la última parte del cuestionamiento de esta mujer incluso apuesta a no cuestionar la participación en el taller si también lo hace la Policía.

La mujer cuestiona no solo la idoneidad del taller, sino la desigualdad con la que son tratadas las trabajadoras sexuales desde el marco normativo el cual les exige un certificado que en ningún otro trabajo solicitan. Es decir, mientras las sentencias de la Corte Constitucional apuntan en una dirección, existen medidas como los talleres que tras su obligatoriedad se convierten en un requisito discriminatorio para las mujeres. Aunque si bien en estos talleres la información ofrecida haga parte de una estrategia del Distrito para ofrecer información y servicios institucionales, así como asegurar un marco de derechos para las trabajadoras sexuales, resulta un requisito que las afecta tanto por el tiempo que deben destinar a su asistencia, como por las implicaciones de su obligatoriedad que se mantuvo durante un tiempo prolongado<sup>18</sup>.

De fondo está la reclamación por la igualdad de derechos laborales, además de un reconocimiento jurídico que les otorgue el mismo estatuto de legitimidad que los demás trabajos, a los cuales no les solicitan un taller dispuesto en el código de policía para realizarlo.

Los anteriores dos fragmentos de entrevistas son solo recortes de apreciaciones y reclamaciones recurrentes que trabajadoras sexuales realizan frente a las expresiones cotidianas que consideran como abusos y violaciones a sus derechos. Estas reclamaciones son parte de la cotidianidad de estas mujeres, no son datos aislados.

## SENTIR LOS DERECHOS EN COLECTIVO: APROPIACIÓN A PARTIR DE LAS ORGANIZACIONES

Ahora bien, algunas trabajadoras sexuales tienen una noción mucho más clara desde la que se posicionan para elaborar sus demandas gracias a un proceso de socialización de sus derechos en las organizaciones que hacen parte o con las que han tenido contacto. Generalmente, el proceso de apropiación, no solo de derechos en la vida cotidiana, sino de conceptos mucho más explícitos en el plano jurídico, se relacionan con procesos colectivos de reclamación.

[18] En la actualidad estos talleres se siguen realizando a cargo de la Secretaría de la Mujer. El certificado de asistencia para las trabajadoras sexuales ya no tiene el mismo carácter de obligatoriedad, sin embargo, sigue siendo un tema que está presente en las reclamaciones de las trabajadoras sexuales ante las instituciones del Distrito.

Es importante resaltar que no todas las organizaciones ni todas las mujeres apelan a la defensa de los mismos derechos, razón que ha dividido las posiciones de las organizaciones y ha creado un espacio de disputa por el acceso al campo jurídico a partir de sus demandas particulares.

La disputa se divide en términos generales entre quienes apelan al reconocimiento de derechos laborales en el mismo sentido que las últimas declaraciones de la Corte Constitucional y quienes consideran que el comercio sexual es una forma moderna de esclavitud hacia la mujer, siguiendo los postulados de la postura abolicionista.

En este sentido, considero que las organizaciones juegan un papel fundamental en la creación de un habitus secundario, en el sentido que lo señala Corcuff (2005) quien plantea que éste se desarrolla en la vida adulta en un proceso de formación de las estructuras de la mente y en el cuerpo, permitiendo interiorizar la exterioridad.

Así, el proceso en el que las trabajadoras sexuales vinculadas a organizaciones han logrado apropiarse de un discurso de derechos surge de un contexto social en el que lo jurídico aparece como una herramienta que permite el reconocimiento de sus derechos. En la formación de este habitus secundario juega un rol fundamental el papel de lo jurídico, en especial porque este grupo de mujeres que realizan una actividad carente de reconocimiento social logra acceder a un espacio de reclamación al cual no podían tener acceso por su histórica situación social de marginación.

Las trabajadoras sexuales en el caso de Bogotá están disputando los significados de lo jurídico respecto a su trabajo. A partir de un proceso de socialización de los derechos a los que pueden acceder en su condición de sexo servidoras, estas mujeres no realizan sus exigencias al Estado de una forma ingenua, saben lo que hacen y con qué sentido lo hacen. Retomando la noción de habitus, es crucial en este punto resaltar que la interiorización de un sentido de apropiación se da en un campo “en el cual los participantes rivalizan por el monopolio sobre el tipo de capital que sea eficaz en él” (Bourdieu, Wacquant, 2012: 43).

En este orden de ideas, la forma de nombrarse dentro del debate por el posicionamiento jurídico frente al comercio sexual es una estrategia de acceder a cierto tipo de derechos que se han interiorizado, como lo relata una mujer que estuvo vinculada al comercio sexual y se considera sobreviviente de la prostitución:

Si yo llego a un entorno y digo que soy una trabajadora sexual, ¿esa persona que viene a buscar acá?, ¿qué dignidad viene a buscar?, si ella se siente identificada con eso, ¿qué oportunidades viene a buscar si ella dice que es un trabajo?, si ella dice que es un trabajo ser prostituta, yo digo que es un trabajo estar aquí en recepción recibiendo llamadas y yo como recepcionistas no puedo decirle a un Estado que me están violando ciertos derechos. (Entrevista realizada en febrero de 2016)

Es significativo que esta mujer señale que considerar su actividad como trabajo sexual le impide reclamar oportunidades al Estado. De acuerdo a como lo menciona, el que sea un trabajo, tal como lo es el trabajo de una secretaria, le impide acceder a una posición de reclamación de cierto tipo de derechos por haber sido vulnerada. Es decir, la posición de vulnerabilidad implica posibilidades políticas de acción que ella ha reconocido. Así el ubicarse en una posición respecto a la forma de concebir el comercio sexual no solo es una posición política, sino además una forma de acceder estratégicamente a diferentes tipos de recursos.

De otra parte, quienes se asumen como trabajadoras sexuales, buscan del Estado un reconocimiento en materia de derechos laborales, lo que a diferencia de la posición de esta mujer, las separa de una lógica de asistencia del Estado.

Lo cierto es que la participación de mujeres en organizaciones de trabajadoras sexuales o de organizaciones que trabajan para su defensa ha abierto una puerta de socialización de determinados derechos, de acuerdo con la perspectiva desde la que se aborde el comercio sexual. Tal vez una de las indicaciones más visibles de este proceso es el empoderamiento transmitido en un lenguaje juridificado,

el cual carga con un contenido discursivo que les permite a estas mujeres una comprensión de sí mismas y de los demás con relación a un orden legal.

## CONCLUSIONES

La intención de la investigación de la que se deriva este artículo es responder, mediante las experiencias vividas por las trabajadoras sexuales, tanto en su actividad como en la lucha por sus derechos en las organizaciones a las que pertenecen, de qué forma se han apropiado de una serie de derechos que se han alcanzado respecto a su trabajo.

Con el ánimo de dar cuenta de estas realidades tomé como unidad de análisis a las mujeres trabajadoras sexuales que se encuentran vinculadas a organizaciones en defensa de sus derechos en Bogotá. Mi objetivo fue rastrear mediante sus experiencias la forma en la que una noción, en algunos momentos tan abstracta como el derecho, ha logrado permear sus vidas y posicionarlas como sujetas de derecho.

Mediante los relatos de las mujeres que luchan por sus derechos desde diversas organizaciones, y desde una mirada etnográfica al espacio compartido durante el periodo de agosto del 2016 hasta marzo del 2017 con estas organizaciones, he planteado unas vías de acceso para explicar el proceso mediante el cual estas mujeres se han apropiado subjetivamente de sus derechos y tiene una tendencia creciente a comprenderse a sí mismas y a los demás como sujetos con derechos a pesar de realizar una actividad que históricamente ha sido estigmatizada y las ha alejado del reconocimiento legal y social.

Es importante señalar que lo que he llamado conciencia legal es diversa, y está enmarcada por la posición política desde la que se originan las reclamaciones. El proceso de apropiación de derechos de las mujeres vinculadas a organizaciones es concebido desde dos frentes. Mientras un grupo está a favor de profundizar y hacer efectivos los derechos que hasta el momento se han ganado en el espacio jurídico, otra facción lucha para revertir estos procesos y hacer efectivo un modelo jurídico abolicionista como el sueco frente al comercio sexual.

Por lo pronto, se puede señalar como efecto del enfrentamiento de las posturas frente al comercio sexual, la obstaculización del proceso de política pública. Sin embargo, esto no ha impedido que instituciones como el Ministerio de Trabajo adelanten un proyecto de Ley como lo señala la Sentencia T-594 de 2016 en la que se cuente con la participación de organizaciones como Asmubuli, organización integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y del Caribe (RedTraSex) para la implementación de las disposiciones emitidas de la Corte Constitucional en Colombia.

En el escenario actual lo cierto es que las trabajadoras sexuales han abierto un espacio considerable en la discusión pública por sus derechos, posicionándose a partir de una participación cada vez más activa que muestra procesos de apropiación subjetiva de sus derechos. Las trabajadoras sexuales organizadas se han comenzado a relacionar frente a la Ley de una manera estratégica que les permite tener cada vez más acceso a ser escuchadas y ser tenidas en cuenta como sujetos políticos, lo cual no ha impedido que se sigan presentando tanto en las instituciones como en sus lugares de trabajo, escenarios de violencia y discriminación.



## BIBLIOGRAFÍA

- AGOFF, Ma. Carolina. 2009. "La abierta competencia entre el reconocimiento jurídico y la valoración social El caso de la violencia de pareja". *Civitas*, Vol. 9, No. 3, pp. 402 a 417
- AMUCHÁSTEGUI, Ana; RIVAS, Marta; ORTIZ-ORTEGA, Adriana. 1999. "La negociación de los derechos reproductivos en México". En Ortiz-Ortega, A. (Comp), *Derechos reproductivos en las mujeres: Un debate sobre justicia social en México*. CdMX: UAM-X
- ARIZA, Libardo José; ÁNGEL, Carolina. 2015. "En el corazón del buen pastor. La apropiación del discurso de los derechos humanos en el contexto penitenciario colombiano". *Antípoda*, Vol. 23, pp. 45 a 64.
- AUSTIN, John. 1990. *Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones*. Barcelona: Ediciones Paidós
- BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loic. 2012. *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores
- CORCUFF, Philippe. 1995. *Las nuevas sociologías. Construcciones de la realidad social*. Madrid: Alianza Editorial.
- ENGLE MERRY, Sally. 1986. "Everyday understandings of the law in working-class America". *American Ethnologist*, Vol. 13, No. 2, pp. 253 a 270.
- EWICK, Patricia; SILBEY, Susan. 1998. *The common place of law. Stories from everyday life*. Chicago: The University Chicago Press
- GARCÍA, Mauricio. 2010. *Sociología y Crítica del Derecho*. CdMX: Distribuciones Fontamara
- LAMAS, Marta. 2016. "Feminismo y prostitución: La persistencia de una amarga disputa". *Debate Feminista*, Vol. 51, pp. 18-35
- LAVERDE, Carlos Alfonso. 2014. *Prostitución y trabajo: Condiciones sociales y laborales de mujeres trabajadoras sexuales en la ciudad de Bogotá*. Bogotá: ILAE
- LAVERDE, Carlos Alfonso. 2016. "Perspectiva de los mercados laborales en un trabajo socialmente devaluado: El caso del trabajo sexual". *Revista CIFE*, Vol. 18, N° 29, pp. 51-67.
- LEMAITRE, Julieta. 2009. "El amor en tiempos de cólera: Derechos LGBT en Colombia". *Sur-Revista Internacional de Derechos Humanos*, Vol. 6, No. 11, pp. 79-97
- NIELSEN, Laura. 2000. "Situating legal consciousness: Experiences and Attitudes of Ordinary Citizens about Law and Street Harassment". *Law & Society Review*, Vol. 34, No. 4, Pp. 1055-1090
- NIETO, José Miguel. 2015. "“Dios me la puso en el medio para mi remedio”: Esferas públicas y producción jurídica de la “prostitución” en la Colombia actual". *Revista colombiana de Antropología*, Vol. 5, N°1, pp. 109-135.
- SCOULAR, Jane. 2014. "¿Qué transa con la ley? Por qué y de qué forma es relevante el derecho para la regulación del trabajo sexual". *Debate Feminista*, Vol. 50, pp. 220-256
- VARELA, Cecilia. 2011. "De la “letra de la Ley” a la labor interpretante: La “vulnerabilidad” femenina en los procesos de judicialización de la ley de trata de personas (2008-2011)". *Cuadernos Pagu*, Campinas. Vol. 41. Pp. 261 a 302.
- WEITZER, Ronald. 2012. *Legalization prostitution. From illicit vice to lawful business*. New York: University Press.



## **DOCUMENTOS LEGALES**

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 2010. Sentencia T-629

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 2016. Sentencia T-594

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 2017. Sentencia T-073

CONCEJO DE BOGOTÁ. 1979. Acuerdo 7.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 1992. Decreto 325

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2001. Decreto 400

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2002. Decreto 188

CONCEJO DE BOGOTÁ. 2003. Acuerdo 79

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 2009. Decreto 335